

COMENTARIOS

EL INFORME DEL PRESIDENTE MAGAÑA ANTE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

A los catorce meses de haber asumido la presidencia, el Dr. Alvaro Magaña rindió informe de su gestión político-administrativa ante la Asamblea Constituyente el pasado 1 de julio.

“En corto tiempo pocas cosas se pueden iniciar”, reiteró el presidente con ánimo de recordar que su provisionalidad, su breve paso por el poder ejecutivo, no le permitirá hacer obras monumentales. En el fondo expone de manera franca que no hay espacio suficiente para darle a su gobierno una fisonomía histórica, un cariz definitorio de las situaciones difíciles por las que atraviesa la nación. La forma misma en que ascendió a la primera magistratura, sujeta a un arreglo entre la Fuerza Armada y los partidos que conforman la Asamblea Constituyente ha determinado el curso de su actuación. Sin embargo, dentro de las limitantes impuestas por el momento, el Presidente Magaña ha dicho también que “grandes cosas se pueden iniciar”.

Sin duda alguna esas “grandes cosas” podrían justificar ante la historia su paso por la presidencia. Se requiere de una gran dosis de valentía y patriotismo proponer e iniciar nuevos caminos, romper esquemas mentales obsoletos, desmitificar ideologías y fórmulas que por años han sido columnas de un sistema político y social que se halla podrido, al borde del derrumbe. El gobernante debe estar consciente de la dificultad, pero no de la imposibilidad de cambiar las actitudes y los hechos que obstaculizan objetivamente la paz y la unidad de El Salvador. Mirar al desastre desde la terraza y hablar de él con el mismo lenguaje anacrónico y demagógico de presidentes anteriores, no puede conducir sino al impasse, al equilibrio personal entre fuerzas sociales antagónicas, irreductibles y, de verdad, irracionales.

El mandatario salvadoreño, según término calificado de feliz, ha dicho que nada tiene que vengar, nada que reprimir y nada que negociar. Se podría coincidir con él si la realidad de El Salvador fuese relativamente normal. Pero no es así. El gobierno de Magaña no tiene por que recurrir a la venganza para hacerse sentir, pero es su obligación velar para que se haga justicia, para que se descubran los crímenes y atropellos cometidos contra la población y para que no se sigan violando principios fundamentales de convivencia humana que irrespetan la vida y el honor de los salvadoreños. Si el Estado y sus instituciones no encarnan la justicia de manera igual para todos, se corre el riesgo de que la venganza haga las veces de acusador, juez y jurado a la vez. Una venganza que, quierase o no, es generada por el que manda, al no atender el llamado de los oprimidos, los perseguidos.

La represión tampoco es función del presidente y en este sentido es bueno que repita muchas veces que nada tiene que reprimir, para que sus subalternos, a todos los niveles, entiendan que la injusticia gubernamental e institucional es la que crea ese ambiente de conflictividad propicio a las soluciones violentas. La aplicación de decretos inconstitucionales, como lo son el 507 y el 943, constituyen la base de un Estado policiaco de excepción, un Estado de emergencia que ha generalizado el terror y ha contribuido a aumentar la indignación popular. Si el mandatario no tiene nada que reprimir, ¿por qué continúa la política de meter en las cárceles a ciudadanos inocentes? ¿Por qué el desaparecimiento de tantas y tantas personas como lo denuncian los comunicados de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador? ¿Por



qué siguen apareciendo cadáveres de jóvenes obreros y estudiantes, torturados y asesinados por cuerpos para-militares y escuadrones de la muerte?

Cuando el Presidente Magaña dice que no tiene nada que negociar, olvida que su gobierno en su totalidad fue fruto de un arreglo político a espaldas del pueblo. El llegó a la primera magistratura por la voluntad forzada de los directivos de los partidos políticos, o sea por decisión de unos pocos ciudadanos, y sin eufemismo alguno, por presión de las Fuerzas Armadas y de Estados Unidos. No objetamos la fórmula, el modo de cómo se lo eligió gobernante, indicamos sólo que se "negoció" su ascenso. En política muchas situaciones, muchos problemas se solventan por medio del consenso, de la conjunción de factores y fuerzas actuantes reales. Es más. Consideramos que su elección en la Asamblea Constituyente fue acertada para aquellos momentos difíciles, de incertidumbre y vacío de poder.

Catorce meses después, el Presidente Magaña no tiene derecho a afirmar que el gobierno de "unidad nacional" y el Pacto de Apaneca han si-

do grandes pasos. En primer término, el objetivo fundamental de lograr la paz, no se ha cumplido. La falla no es sólo del poder ejecutivo y de la Fuerza Armada, sino de los grupos civiles de apoyo que lejos de buscar una solución mediada entre los sectores en pugna, han agudizado el conflicto al rechazar las reformas y acentuar la persecución por motivos ideológicos. La alianza concertada en el Pacto de Apaneca tenía como meta arribar, pronto, a la pacificación y democratización del país. El polo de poder reconstituido en torno a un plan y a un cronograma bien definido quedó en un papel firmado en el aire, sin sustentación real, desde el instante mismo en que se encuadró toda la estrategia política del gobierno en catalogar al FDR y al FMLN como portaestandartes de la penetración soviética en El Salvador, apoyados por Cuba y Nicaragua.

Esa visión reduccionista del problema de la izquierda insurgente, sin profundizar en las causas objetivas del problema político, económico y social del país, ha hecho que las partes que suscribieron el Pacto de Apaneca, naveguen a la zaga de las decisiones de Washington frente a la guerra y a la paz en Centroamérica.

Mientras el Presidente Magaña afirma que se ha desterrado el "presidencialismo", verdadera enfermedad gubernamental, olvida por otra parte que factores externos deciden y actúan por sobre la voluntad y soberanía de la República. Malos presidentes hemos tenido en cantidad, pero de una u otra forma cuidaban de que las cosas internas de El Salvador no se manejaran pública y abiertamente desde EE.UU. Esta pérdida de la dignidad nacional, esta pesada hipoteca sobre el gobierno transitorio, debe corregirse de inmediato. No puede la nación salvadoreña hacer lo que le señalan sus aliados, así sea el aliado principal con asiento en la Casa Blanca. El Salvador debe actuar de acuerdo con sus intereses, que no son otros que la paz y la seguridad interna, bien entendidas. Paz y seguridad que únicamente pueden lograrse eliminando la gran brecha entre multimillonarios y multimiserables, entre grupos minoritarios que controlan el poder político-militar y las masas que deambulan sin horizonte en un éxodo, en un desplazamiento dramático, humillante ante propios y extraños. Esto hay que evidenciarlo a la hora en que, con el pretexto del comunismo y de la subversión, quieren arrastrar al país a una guerra regional de funestas consecuencias.

El Presidente Magaña pone énfasis en el evento electoral que se celebrará a fines de año, prueba a la que debe someterse el pueblo, sin advertir que tal acontecimiento es adelantado o atrasado no por los propios salvadoreños, sino por extranjeros que asesoran y deciden sobre su conveniencia e inconveniencia según los planes de Reagan en El Salvador. Las elecciones presidenciales, de diputados y alcaldes son algo importante para "institucionalizar" el proceso, pero el Presidente Magaña no se da cuenta que a estas alturas ni siquiera se ha logrado el consenso parcial para aprobar la Carta Magna de 1983. Constitución que, al decir de los expertos, es lo más difuso, confuso e infuso que ha podido redactarse desde 1950 en materia doctrinal y política.

El gobierno de Magaña da cuenta del nombramiento de la Comisión de Paz, organismo sin poder y sin credibilidad, que no ha dado un sólo paso en la tarea que se le ha encomendado. Declaraciones retóricas, vacías, apenas si perfilan a un grupo parcializado con la presencia de un político perteneciente a uno de los partidos de la derecha agraria y, por ello, descalificado para exhortar a la izquierda a sentarse en la mesa de la concordia y la reconciliación. Igual señalamiento puede hacerse a la Comisión de Derechos Humanos, cuya manifiesta imparcialidad la convierte en vehículo de propaganda oficial, a tono con la consigna de ganar imagen internacional y proseguir la guerra fratricida que alcanza ya las cincuenta mil víctimas.

Otro problema abordado por el Presidente Magaña en su informe es la recuperación económica, con tal desubicación es increíble que pueda hablar de planes e iniciativas tendientes a nuevas políticas salariales y de aumento en las tasas de impuestos, en momentos de recesión, inflación y caída vertical de la productividad. La economía para la guerra, a base de endeudamiento interno y externo, nos llevará poco a poco a la devaluación oficial del colón y a márgenes de mayor miseria y marginalidad. Ocultar esto en el discurso presidencial es ir demasiado lejos, dado que nadie desconoce el desmoronamiento económico nacional. Basta recordar que la vigencia del decreto 544 congela los sueldos y coloca a los trabajadores en situación de penuria alevosa.

Quisiéramos, luego de leer las palabras del Presidente Magaña, creer que los cambios socio-económicos siguen adelante, pero los hechos demuestran lo contrario. La derechización del proceso iniciado el 15 de octubre de 1979 ha llegado a los límites de retorno. Está por firmarse el acta de defunción del golpe octubrista. Discursos y más discursos sepultan la acción de la juventud militar, mientras la violencia, el crimen, la mentira y el entreguismo a EE.UU. nos colocan como corderos próximos a ser sacrificados en la confrontación militar centroamericana.

J.C.R.